



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

PROPOSICIÓN.

Aplácese la discusión del Proyecto de Acto Legislativo 458 de 2020 Cámara - 022 de 2020 Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación minera en ecosistemas de páramos.

JUSTIFICACIÓN

Con este proyecto, se fractura uno de los pilares de la Ley orgánica territorial, como es la integralidad, la autonomía territorial, el arraigo de las personas, y sobre todo la prospectiva en municipios que depende en su gran mayoría de actividades mineras y su encadenamiento productivo. Se se aparta de las disposiciones constitucionales y legales que asignan esta potestad a los municipios.

En muchos países la libertad de empresa se designa también habitualmente al concepto de libertad económica, con rango constitucional. En este proyecto en un área que no está declarada como de protección, limitan las actividades de “alto impacto” de manera general, pero establecen la de subsistencia y artesanal que no están reguladas en la norma, ni bajo el control del estado, no necesitan título minero, esto es abrir una caja de pandora a la ilegalidad.

Por otro lado, los EEAP deben ser aprobados por la autoridad competente al igual que su posterior Plan de Manejo Ambiental (PMA) según la resolución 1128 del 2006 del MADS. En otras palabras, cuando se efectuó el EEAP, en su delimitación se analizó no solo las áreas de fragilidad y las áreas propias del ecosistema, sino también las áreas aledañas que tuviesen influencia directa en su conservación. Se podría concluir que las zonas de amortiguamiento ya están incluidas en la delimitación de los páramos.

Adicionar una prohibición en una franja adicional a la delimitación del páramo es asumir una nueva figura de protección ambiental sin sustento técnico alguno, ya que se omite un análisis y una caracterización real de factores.

Una delimitación de un páramo, o de cualquier ecosistema, involucra la interacción de muchas entidades: MADS, MME, Corporaciones ambientales, Humboldt, entes



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

territoriales, comunidades, ONG, gremios, etc.; que deben ser consultados y bajo la premisa de la conservación ambiental, se analizan las compatibilidades. Para este Proyecto de Acto Legislativo ninguna de las partes mencionadas ha sido consultada para el texto adicional a la prohibición del páramo (zonas colindantes y/o amortiguamiento del páramo).

Es indudable que el país debe trazar unos derroteros en materia de conservación ambiental, pero estos deben surgir producto del consenso nacional, regional y local; deben estar articulados con las demás políticas estatales e interrelacionarse con los demás procesos de planificación económica y social como lo exige la ley.

Otro de los efectos a considerar en las zonas colindantes a páramo con este proyecto es la limitación del dominio, especialmente frente a predios de propiedad privada, predios que ya tienen limitación por la función ecológica de la propiedad, ahora se pretende limitar su uso económico.

Es evidente que el enunciado que hacen en la propuesta de modificación del artículo 79 de la constitución política, sobre el derecho que tienen las personas a gozar de un ambiente sano y el deber especial que tiene el Estado a la protección del agua, se está usando para concluir acciones que, sin un fundamento técnico de impacto negativo, prohíben actividades que permitían el desarrollo económico y la autosostenibilidad de quienes habitan legalmente estos territorios.

El páramo se había definido ya como ecosistema estratégico, susceptible de protección especial, pero no hay evidencia científica que obligue a utilizar la reforma constitucional como elemento de ampliación de las zonas delimitadas. Hay que recordar que esto puede multiplicar de manera injustificada, no solo el número de títulos y personas afectadas, sino poner en grave riesgo la estabilidad socioeconómica y el desarrollo de territorios que, como Boyacá y Cundinamarca, han dependido de la minería de una manera representativa.

En el trámite del Proyecto se evidencia una inconformidad regional en Santander con la delimitación del páramo de Santurban y sería incomprensible que, para solucionar un tema regional, se genere un desequilibrio a nivel nacional. También se analiza que el proyecto es desfavorable para los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

Esta iniciativa, puede generar efectos contrarios a lo pretendido como:



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

- La prohibición total de acciones productivas es el nicho para el desarrollo de actividades ilícitas.
- Trastorna la económica local y regional de la zona pues en departamentos como Cundinamarca y Boyacá, la minería es a nivel local la única actividad económica que resuelve los problemas de empleo, y mueve la economía a través de sus actividades conexas.
- Con el proceso de la declaratoria de paramos, muchos titulares mineros renunciaron a la superposición con este, replantearon su proyecto en el área restante, trasladaron sus bocaminas su infraestructura etc., efectuaron nuevamente grandes inversiones con la certeza que les brinda las diferentes sentencias de la corte constitucional al respecto.

En conclusión, las cadenas mineras de los diferentes recursos que posee nuestro país constituyen un sector productivo de carácter representativo en la economía Colombiana e insustituible en algunas regiones y municipios de nuestros departamentos inicialmente mencionados. Este proyecto de ley dejaría fuertes pilares de oposición a su desempeño.

Es importante mantener la estabilidad de esta industria, con reglas claras de juego que permitan tener estabilidad jurídica para los inversionistas, trabajadores y comunidades, sin cambios normativos permanentes como ha ocurrido en los últimos años; por lo cual solicitamos el apoyo del gobierno nacional, congresistas, mandatarios departamentales y municipales, así como de comunidades para evitar que con esta nueva iniciativa se frene, sin ninguna argumentación técnica, una actividad legal, generadora de desarrollo local, regional y nacional y comprometida con las mejores prácticas ambientales y sociales.



JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
Representante a la Cámara.

José Caicedo
Representante a la Cámara

Cra. 7 No. 8 -68 Bogotá D.C. Edificio Nuevo del Congreso
Of. 521B - 522B Tel.: 4325100 Ext: 3124 – 3561 – 3562
caicedo.camara@gmail.com